

Expediente: 1689/19-I4

Carátula: HAGELSTROM ALLAN C/ YOKOHAMA ARGENTINA S.A. S/ SUMARISIMO (RESIDUAL)

Unidad Judicial: OFICINA DE GESTIÓN ASOCIADA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN N° 1

Tipo Actuación: INTERLOCUTORIA (RECURSO) CON FD

Fecha Depósito: 01/05/2026 - 00:00

Notificación depositada en el/los domicilio/s digital/es:

20129198703 - HAGELSTROM, ALLAN-ACTOR/A

90000000000 - YOKOHAMA ARGENTINA S.A., -DEMANDADO/A

20247378244 - MOREIRA, EDUARDO ALBERTO-PERITO

20224147334 - YOKOHAMA RUBBER LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, -DEMANDADO/A

20224147334 - THE YOKOHAMA RUBBER CO. LTD, -DEMANDADO/A

30715572318715 - FISCALIA DE CAMARA CIVIL COM. Y LABORAL

27232100767 - KATZ, CECILIA GRACIA-PERITO

PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN

CENTRO JUDICIAL CAPITAL

Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Común (Sala II)

Oficina de Gestión Asociada de Apelaciones en lo Civil y Comercial Común N° 1

ACTUACIONES N°: 1689/19-I4



H104006133346

San Miguel de Tucumán, 30 de abril de 2026

AUTOS Y VISTOS: La causa caratulada "HAGELSTROM ALLAN c/ YOKOHAMA ARGENTINA S.A. s/ SUMARISIMO (RESIDUAL)" - Expte. N°: 1689/19-I4, y

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante sentencia N.° 3013 de fecha 2/12/2025, el Juzgado Civil y Comercial de XI Nominación resolvió no hacer lugar al incidente de nulidad interpuesto por la parte demandada con fecha 23/7/2025.
2. Con fecha 18/12/2025, la parte demandada interpuso recurso de apelación y expresó agravios.
3. El recurso fue concedido el 22/12/2025. Sustanciado el traslado, la parte actora lo contestó el 12/2/2026, solicitando su rechazo sobre la base de los argumentos que expone, los que se tienen por reproducidos en honor a la brevedad.
4. Elevada la causa a esta Alzada, con fecha 11/3/2026 emitió dictamen la Sra. Fiscal de Cámara.
5. Firme el llamamiento de autos para sentencia, el recurso de apelación se encuentra en estado de ser resuelto. Cabe recordar que este Tribunal sólo puede examinar los agravios expresamente planteados, quedando fuera de revisión aquellos aspectos consentidos por las partes (art. 777 CPCC), sin que resulte exigible el tratamiento de todos los argumentos ni de la totalidad de la

prueba producida, sino únicamente de aquellos elementos conducentes y suficientes para fundar la decisión.

6. Antecedentes.

THE YOKOHAMA RUBBER CO. LTD. (YRC) solicita la nulidad de la cédula de notificación del traslado de la demanda (26/6/2023), de la notificación de la sentencia (15/11/2024), de toda eventual notificación cursada por edictos o carta documento a domicilios en el país, en particular el de Garín, Provincia de Buenos Aires, y de todos los actos posteriores.

Funda su planteo en que las notificaciones no fueron dirigidas al domicilio real de la sociedad en Japón, en violación del art. 200 del CPCC, lo que le impidió tomar conocimiento del proceso y ejercer su derecho de defensa.

Defiende que su pedido es tempestivo en los términos del art. 222 inc. 1 CPCC, ya que tomó conocimiento el 16/7/2025 a través de Yokohama Rubber Latin America (Brasil), quien a su vez advirtió la existencia del proceso a raíz de un embargo a un distribuidor local.

Destaca que Yokohama Brasil, Fortalein S.A. y la casa matriz japonesa son personas jurídicas distintas e independientes, sin representación recíproca, y que la única relación con Fortalein fue un contrato de distribución finalizado en 2016. Señala que la notificación fue diligenciada en el domicilio de esta última, lo que evidencia el error en identificar a las codemandadas como una única entidad.

La parte actora contesta el incidente de nulidad solicitando su rechazo, con imposición de costas, e invoca el art. 122 de la Ley General de Sociedades.

Sostiene que los propios letrados del incidente también representaron a Yokohama Brasil y que el conocimiento del pleito provino de Fortalein S.A., distribuidor local demandado. Afirma que, pese a alegarse la finalización del vínculo contractual en 2016, fue Fortalein quien recibió el reclamo en 2019, examinó los productos y rechazó la garantía, manteniéndose además como “importador y distribuidor exclusivo” en la página web vigente, donde figura el domicilio en el que se diligenció la notificación.

Con base en la teoría de la apariencia, entiende válida la notificación en dicho domicilio, máxime en el marco de una relación de consumo, donde exigir la notificación en Japón resultaría irrazonable. Señala que la propia publicidad de la empresa integra el contenido contractual y legitima ese domicilio como válido.

Agrega que quien recibió la cédula manifestó que el requerido tenía domicilio y actividad allí, lo que refuerza su validez. Concluye que Fortalein actuó como representante de Yokohama, que no puede invocarse la nulidad por quien generó la situación y que, en todo caso, los actos procesales se encuentran convalidados por haber vencido el plazo legal para articularla.

La sentencia de grado rechazó el planteo. Aplicó el art. 122 inc. b de la Ley General de Sociedades (LGS) que admite el emplazamiento en el país cuando exista cualquier forma de representación, valorando que de la prueba surge que Fortalein no actuaba como un mero distribuidor, sino como una verdadera prolongación de Yokohama en el mercado local. Refuerza lo anterior con aplicación de la teoría de la apariencia y el marco de una relación de consumo.

7. Agravios.

7.1. La sentencia desconoce la trascendencia constitucional del acto de notificación del traslado de la demanda.

La demandada sostiene que la jueza de grado ha minimizado la entidad jurídica que reviste la notificación del traslado de la demanda cuya función es garantizar que el proceso se constituya bilateralmente y que el contradictorio sea efectivo, no meramente formal.

Sostiene que en el caso concreto, el perjuicio sufrido no es hipotético, conjetural o meramente teórico, sino real y de extrema gravedad ya que YRC fue privada, por completo, de toda posibilidad de intervención en un proceso en el que se discutió su responsabilidad patrimonial y en el que, finalmente, se dictó sentencia condenatoria en su contra.

7.2. La notificación en el domicilio real extranjero no constituye una práctica abusiva. La sentencia vulnera tratados internacionales vigentes.

Se agravia de la afirmación según la cual, exigir la notificación en el domicilio real extranjero importaría una práctica abusiva por parte de YRC, que trasladaría al consumidor una carga irrazonable o de cumplimiento imposible. Entiende que esta conclusión confunde la protección del consumidor con la supresión lisa y llana de las garantías procesales del demandado.

En ese sentido, propone un test de proporcionalidad entre los arts. 42 y 18 de la Constitución Nacional y concluye que el resultado es inverso al adoptado por la jueza de grado ya que tener por válida una notificación local que prescinde del domicilio real extranjero no es idóneo, porque no garantiza el conocimiento efectivo del proceso por parte de quien debe responder; no es necesario, porque existen vías alternativas estandarizadas, accesibles y de costo razonable —exhortos diplomáticos, cartas rogatorias canalizadas a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, mecanismos previstos en la Convención de La Haya— que aseguran el conocimiento real sin sacrificar derechos; no es proporcionado porque el beneficio que obtiene el actor al evitar la notificación, no guarda proporción con el sacrificio que se impone al demandado de la pérdida total e irreversible de su derecho de defensa.

Apunta que no es YRC quien impuso al consumidor la carga de notificar en Japón, sino la propia parte actora quien decidió ampliar la litis incluyendo a una sociedad extranjera entre los demandados, debiendo asumir, en consecuencia, las cargas correlativas, entre ellas la de notificar regularmente a cada uno de los codemandados en sus respectivos domicilios.

Objeta la afirmación según la cual la notificación en el extranjero constituye una carga "imposible" o "irrazonable" ya que la notificación internacional es, hoy en día, un trámite regular y de costo moderado, perfectamente asumible dentro de un proceso judicial. Cita la Convención de La Haya del 15/11/1965 sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales y Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial de la que tanto la República Argentina como Japón son Estados parte, la cual establece un procedimiento claro, accesible y eficaz para canalizar este tipo de diligenciamientos. De tal forma, sostiene que convalidar una notificación que prescinde de este mecanismo no solo violenta el derecho procesal interno, sino que desconoce una obligación internacional del Estado argentino.

7.3. Aplicación errónea del art. 122 de la Ley General de Sociedades.

Alega que en el caso no se dan los presupuestos del art. 122 de la LGS.

No hubo un acto aislado celebrado por la sociedad porque el actor adquirió un vehículo a Toyota en una operación en la que YRC no tuvo intervención directa ni indirecta. Las cubiertas marca Yokohama vinieron instaladas de fábrica en el vehículo, sin que YRC haya celebrado contrato alguno con el actor ni haya intervenido en la cadena de comercialización local. Tampoco Fortalein es ni fue apoderado de YRC.

En cuanto al inciso b) del art. 122 LSC que habilita el emplazamiento local "si existiere sucursal, asiento o cualquier otra especie de representación, en la persona del representante", señala que la noción de "cualquier otra especie de representación" no puede interpretarse como una mera ficción sino que requiere la existencia de un vínculo formal entre la sociedad extranjera y el sujeto local, acompañado de facultades reales para actuar en su nombre, y en los casos de actividad habitual la correspondiente inscripción registral conforme a los arts. 118 y 123 LSC. Nada de ello se verifica en el caso. Fortalein es un mero distribuidor comercial que compra mercadería, la revende y presta servicios de posventa. Ninguna de estas actividades constituye representación legal en los términos exigidos por la norma. La distribución comercial no genera representación societaria, no crea domicilio procesal y no habilita a recibir válidamente notificaciones judiciales dirigidas a la sociedad extranjera fabricante.

Promueve que la diferencia entre representación comercial y representación societaria no es meramente terminológica. La representación societaria implica la existencia de un sujeto habilitado para vincular jurídicamente a la sociedad representada, recibir notificaciones en su nombre y comprometer su patrimonio. La representación o coordinación comercial, en cambio, se limita al ámbito propio del contrato de distribución y no produce ninguna de esas consecuencias jurídicas. La continuidad comercial de Fortalein con productos YRC, el uso del nombre "Yokohama" en su sitio web o en correos institucionales, y la coordinación técnica entre fabricante y distribuidor son manifestaciones típicas de un contrato de distribución internacional.

En otro orden, apunta que la propia Cámara, mediante pronunciamiento del 17/11/2025, reconoció expresamente que YRC y Fortalein son personas jurídicas totalmente distintas e independientes, vinculadas únicamente por un litisconsorcio pasivo facultativo, en el cual cada codemandado actúa como litigante independiente, de modo que los actos procesales de uno no benefician ni perjudican al otro. Sostiene que esta declaración, emanada del mismo tribunal que ahora debe resolver el presente recurso, derriba de manera definitiva la construcción argumental sobre la que se asienta la sentencia apelada. Si YRC y Fortalein son sociedades autónomas, sin vínculo jurídico de representación, resulta lógica y jurídicamente imposible sostener que la notificación practicada en el domicilio de Fortalein, recibida por una empleada administrativa de esta última, pueda considerarse válidamente realizada respecto de YRC.

7.4. Defectos de la cédula de notificación

Sostiene que a los defectos de fundamentación se suman los vicios materiales de la propia cédula, que evidencian su nulidad de manera ostensible. Concretamente, cuestiona que la cédula fue dirigida indistintamente a cuatro personas jurídicas distintas: "Yokohama Argentina", "The Yokohama Rubber Argentina Co., Ltd.", "Yokohama Argentina S.A." y "Fortalein S.A." mediante el uso del conector "y/o", como si todas ellas constituyeran una misma entidad. Algunas de estas sociedades ni siquiera existen, y respecto de ellas se llegó al absurdo de declarar la rebeldía. Esta sola circunstancia evidencia el desconocimiento absoluto de la realidad jurídica de las sociedades involucradas y la ligereza con que se diligenció un acto procesal de máxima trascendencia.

El domicilio consignado no corresponde a YRC, sino a Fortalein. Surge del propio Registro Nacional de Sociedades que la dirección "Panamericana Ruta 9, Km. 42, Colectora Oeste 1588, Garín, Buenos Aires" pertenece exclusivamente a Fortalein S.A. y no a ninguna sociedad vinculada a YRC. Pretender notificar a cuatro sociedades distintas en un mismo domicilio, sin individualizar a cada una, sin identificar apoderado específico y sin invocar correctamente fundamento legal, es procesalmente inadmisibles.

La cédula fue recibida por una empleada de Fortalein, sin vínculo alguno con YRC. Este extremo quedó sobradamente acreditado. La recepción por persona ajena al destinatario es, por sí sola, causal suficiente de nulidad, pues impide el cumplimiento del fin esencial del acto: que el demandado tome conocimiento real y oportuno de la pretensión deducida en su contra.

7.5. Ausencia de inscripción de YRC en Argentina

YRC no se encuentra inscripta en los términos del art. 118 LSC en la República Argentina, nunca fijó domicilio en el país, no posee sucursal, asiento ni representación legal acreditada, y no desarrolla actividad habitual bajo los parámetros de dicha norma. En consecuencia, no existe base normativa alguna que habilite a considerar un domicilio procesal en territorio argentino, siendo la única notificación válida posible la practicada en su domicilio real en Japón, mediante los mecanismos del auxilio procesal internacional.

7.6. Inaplicabilidad de la teoría de la apariencia.

Sostiene que la teoría de la apariencia opera en el ámbito de los actos jurídicos sustanciales, donde la protección de la confianza legítima de los terceros de buena fe puede justificar la atribución de efectos a conductas que, formalmente, no satisfacen todos los recaudos legales. Su lógica es protectora del tráfico comercial y se asienta sobre la dinámica propia del derecho privado. Sin embargo, esta lógica no es trasladable, sin más, al ámbito procesal, donde rige un principio diferente: el del cumplimiento estricto de las formas establecidas por la ley. El estándar aplicable no es el de la "apariencia razonable", sino el del "conocimiento real y oportuno".

Admitir la teoría de la apariencia en este ámbito implica que el demandado quede sujeto a las consecuencias de un proceso del que no tomó conocimiento real, sobre la base de que un tercero —el actor— habría podido razonablemente creer que el distribuidor local representaba a la sociedad extranjera.

Aun si se admitiera por vía de hipótesis la aplicabilidad de la teoría de la apariencia a las notificaciones procesales, sus presupuestos no se verifican en autos. La teoría exige, como condición indispensable, que el supuesto representado (en este caso, YRC) haya desplegado una conducta idónea para inducir razonablemente a un tercero a creer que quien actúa lo hace en su representación. Nada de eso ocurrió en el caso. YRC no tiene sucursal en el país, no registró representación societaria local, no fijó domicilio en Argentina, no desplegó actividad habitual en territorio nacional ni intervino en la operación de venta del vehículo del actor. Las cubiertas marca Yokohama vinieron instaladas de fábrica en un vehículo adquirido a Toyota, sin participación de mi mandante en esa cadena de comercialización local.

Apunta que la sentencia se apoya, principalmente, en el uso de correos electrónicos con dominio "@yokohama.com.ar" y en ciertas comunicaciones remitidas al actor, sin embargo, no se acreditó en momento alguno que dicho dominio pertenezca o sea administrado por YRC. Por el contrario, el propio sufijo ".com.ar" evidencia que se trata de un dominio local, registrado en NIC Argentina, y que necesariamente debe estar administrado por una persona con presencia o representación en el país. Dado que YRC carece de tal presencia, la inferencia lógica es que el dominio pertenece a Fortalein, lo que es coherente con su rol de distribuidor que utiliza la marca comercial bajo licencia del fabricante, pero el uso de la marca por parte del distribuidor no transfiere al fabricante la responsabilidad por las comunicaciones cursadas desde dominios locales que aquel administra.

Tampoco se configuran los supuestos del art. 367 del Código Civil y Comercial, que regula la representación aparente en el ámbito de los actos sustanciales. La norma exige que el representado administre un establecimiento abierto al público (inc. a), o que sus dependientes intervengan en el

acto (inc. b), o que se entreguen mercaderías pertenecientes al representado (inc. c). Ninguno de estos supuestos se verifica: Fortalein no administra un establecimiento de YRC, sus empleados no son dependientes de YRC, y la mercadería que comercializa la adquiere en propiedad mediante operaciones de compraventa internacional, no en concepto de consignación o representación.

7.7. Omisión injustificada de la prueba que acredita el domicilio real de YRC en Japón.

Le causa agravio que la Sentencia haya prescindido de valorar el conjunto de pruebas que acreditan de manera fehaciente que el domicilio real de YRC se encuentra en Japón. Cuestiona que tal omisión es particularmente grave porque la propia jueza de grado fue quien dispuso la apertura del incidente de nulidad y ordenó la producción de prueba destinada exclusivamente a determinar el domicilio real de YRC. Es decir, la magistrada reconoció, al ordenar dicha apertura, que el domicilio real era un hecho controvertido y dirimente para resolver la nulidad planteada. Sin embargo, una vez producida la prueba —y arrojado un resultado unívoco—, la Sentencia trató ese hecho como una circunstancia accesorio, sin extraer de él las consecuencias procesales que la ley impone. Describe las pruebas producidas en tal sentido.

Entiende que la consecuencia procesal de esta omisión es directa y de extrema gravedad: al no haberse valorado el hecho acreditado de que YRC tiene su domicilio real en Japón, la Sentencia convalida una notificación practicada en un domicilio que objetivamente no le pertenece, fue recibida por una persona ajena, en un acto que objetivamente no permitió tomar conocimiento del proceso.

Concluye afirmando que la ausencia de YRC en el procedimiento no obedeció a desinterés ni a negligencia procesal: obedeció a la imposibilidad fáctica y jurídica de intervenir en un expediente del que nunca fue válidamente anoticiada. Esta indefensión, derivada directamente de la omisión de valoración probatoria, configura una violación manifiesta del art. 18 de la Constitución Nacional y compromete la validez del pronunciamiento en los términos de la doctrina de la arbitrariedad de sentencia desarrollada por la Corte Suprema

8. A continuación, procedo al tratamiento y resolución de los agravios.

Como lo pone de manifiesto el dictamen del Ministerio Público Fiscal, el punto determinante de la suerte del planteo de nulidad radica en resolver si la firma Fortalein S.A encuadra en la figura de representante local, en cuyo caso la notificación del traslado de demanda y restantes fueron practicadas en los términos del art. 122, LGS, o, si, por el contrario, resulta ser un mero distribuidor, supuesto en el que las notificaciones realizadas en Panamericana, Ruta 9, km. 42, Colectora Oeste, 1588, Ramal Campana, Garion, Prov. de Buenos Aires, resultan nulas.

El marco normativo aplicable y el examen integral de las constancias de la causa, permiten anticipar que Fortalein S.A. ha actuado como representante local de The Yokohama Rubber Co. Ltd. en los términos amplios del art. 122 inc. b) de la Ley General de Sociedades, razón por la cual las notificaciones practicadas en su domicilio son válidas y producen todos sus efectos legales.

La cuestión debe ser examinada en el marco de una doble matriz normativa: por un lado, el régimen de las sociedades extranjeras del art. 122 y ccts. de LGS; por otro, el sistema protectorio del consumidor (art. 42 CN; Ley 24.240; arts. 1092 y ss. CCCN). Esta confluencia impone una interpretación que, sin desvirtuar el régimen societario, incorpore de manera efectiva el principio in dubio pro consumidor (art. 3 LDC) y asegure el acceso real y efectivo a la justicia de la parte que, en la relación estructural, se encuentra en situación de desigualdad.

El art. 122 inc. b) LGS habilita el emplazamiento, en la República Argentina, a una sociedad constituida en el extranjero cuando exista "sucursal, asiento o cualquier otra especie de

representación".

En la interpretación del inciso, se ha advertido que la fórmula final "cualquier otra especie de representación" ha sido deliberadamente concebida con amplitud por el legislador. Así, Nissen adhiere a la denominada tesis amplia y propone merituar la conducta del supuesto representante de la sociedad extranjera, de modo que cuando de los antecedentes del proceso surge inequívocamente la existencia de representación en el país, debe aceptarse que la notificación de la demanda se efectúe en el domicilio de aquélla, careciendo de relevancia que la sociedad extranjera no se haya inscripto en la República Argentina. Ésta es —enseña el autor— "la tesis que mejor ampara los diversos intereses que se encuentran en juego, pues parece evidente concluir que el incumplimiento, por parte de la sociedad extranjera, de sus obligaciones registrales en nuestro país, no puede generarle mejores derechos que los que le hubiesen correspondido de haber cumplido con las prescripciones legales imperativas de nuestro ordenamiento societario" (Nissen, Ricardo A., "Ley de Sociedades Comerciales", 3ª ed. actualizada y ampliada, Astrea, t. 2, comentario al art. 122. p. 231).

En idéntica línea, el citado autor advierte que las violaciones a la legislación sustancial argentina no pueden beneficiar al infractor: si la sociedad extranjera prefirió actuar al margen del régimen registral, o canalizar su presencia local a través de figuras contractuales que ocultan la verdadera entidad del vínculo, mal puede luego invocar esa misma irregularidad para escudarse frente al emplazamiento. La operatividad del art. 122 inc. b) no exige, por tanto, un acto formal de representación: alcanza con que del propio proceso surja, con claridad, que el sujeto local opera como canal estable y necesario de la sociedad foránea en el mercado argentino.

Esta hermenéutica, lejos de forzar el texto del art. 122 inc. b) LGS, es la que mejor armoniza con su finalidad: evitar que las dificultades prácticas de notificar en el exterior se conviertan en una herramienta de evasión, premiando la mala fe de quien debió registrarse y no lo hizo.

Desde ese enfoque, del examen del Distributorship Agreement del 1 de enero de 2011 y de su Memorando de prórroga del 1 de enero de 2016 —traducidos al español por traductora pública matriculada y debidamente legalizados ante el CTPCBA— (ingresado mediante presentación digital el 22/9/2025), surge que el vínculo entre Fortalein y YRC excede ostensiblemente las notas típicas de una mera distribución comercial.

Particularmente, ciertas cláusulas del acuerdo resultan decisivas a los fines del emplazamiento previsto por el art. 122 inc. b) LGS, en tanto demuestran que Fortalein no operaba como un simple revendedor independiente, sino como el canal estable y necesario a través del cual Yokohama ejecutaba materialmente sus obligaciones frente al mercado argentino y recibía la información indispensable para su giro en el país.

El art. 10 ("Información") es, en este sentido, dirimente. Impone a Fortalein la obligación de proporcionar al Fabricante informes escritos —periódicos y a requerimiento— sobre el volumen mensual de ventas (inc. a), las existencias mensuales (inc. b), la proyección anual (inc. c), las actividades de promoción (inc. d), los reclamos de clientes y reclamos por responsabilidad por productos defectuosos (inc. e), los cambios en las leyes locales que afecten a los productos, su importación y distribución (inc. f), la información de mercado (inc. g) y los estados contables del distribuidor (inc. h). El alcance de esta obligación informativa —que incluye expresamente reclamos del consumidor, novedades legislativas locales y datos contables— revela que Fortalein operaba como un verdadero representante de YRC en el país. Si Fortalein estaba contractualmente obligada a comunicar a YRC los reclamos de los consumidores y los cambios normativos locales, mal puede sostener YRC que una notificación judicial recibida por su distribuidor exclusivo no llegó —o no

podía llegar— a su conocimiento.

El art. 8 ("Calidad de Mercado") refuerza esta conclusión porque regula precisamente el supuesto de autos: la gestión de reclamos por productos defectuosos. El Fabricante provee a Fortalein su Programa de Garantía y autoriza modificaciones unilaterales (art. 8.1). Ante un reclamo de calidad por falla del Fabricante, Fortalein debe informarlo de inmediato y conservar los productos dañados hasta que el ingeniero del Fabricante concorra a inspeccionarlos (art. 8.2). Si ello no fuera posible en plazo razonable, un perito liquidador certificado por el propio Fabricante inspecciona los productos, completa el formulario "Solicitud de Diseño de Neumático y Cámara Dañados" y lo remite junto con fotografías, debiendo el ingeniero del Fabricante verificar la información y emitir un dictamen "definitivo y vinculante para las partes" (art. 8.3). El art. 8.7, por último, obliga a Fortalein a comunicar al Fabricante toda información que genere dudas sobre la seguridad de los productos y a cooperar en las medidas correctivas, incluido el retiro del mercado.

De esta forma, el reclamo del consumidor por productos defectuosos —supuesto de autos— está específicamente previsto como un asunto que se gestiona en sede del distribuidor argentino, con intervención técnica del fabricante japonés; y los dictámenes técnicos sobre los neumáticos del actor —emitidos en papel "Yokohama" y agregados a autos— responden exactamente al procedimiento del art. 8.3, lo que confirma que la organización empresaria YRC-Fortalein funcionó efectivamente frente al consumidor.

El art. 13 ("Uso de la Marca") completa el cuadro: autoriza expresamente a Fortalein a utilizar las marcas del Fabricante "con el exclusivo fin de publicitar los Productos en el Territorio (...) con la previa aprobación del Fabricante". Esta cláusula explica jurídicamente el uso del dominio www.yokohama.com.ar, las casillas institucionales con dicho dominio (entre ellas belen.carbone@yokohama.com.ar, utilizada en el caso para canalizar el reclamo del actor) y la consigna del domicilio de Garín en el sitio oficial de Fortalein como punto de contacto de Yokohama en el país. El uso de la marca "YOKOHAMA" por parte de Fortalein no debe interpretarse como una mera tolerancia, sino como una autorización del Fabricante para que el distribuidor se presente ante el público como su cara visible. Mal puede el Fabricante autorizar contractualmente el uso de su marca por el distribuidor para construir su presencia en el mercado, y luego desentenderse de las consecuencias procesales de esa misma presencia.

A los anteriores se suma el art. 9 que regula el "Servicio de Garantía OE" (equipamiento original) prestado por Fortalein respecto de neumáticos de fábrica, dato directamente atinente al caso.

Valoradas en conjunto, estas estipulaciones revelan un grado de injerencia, control y cooperación funcional que desborda la lógica de la compraventa sucesiva de productos, propia de una mera distribución. Lo que se presenta nominalmente como "distribución" funciona, en los hechos, como una representación operativa estable. Precisamente lo que recepta la fórmula amplia del art. 122 inc. b) LGS al hablar de "cualquier otra especie de representación".

Lo expuesto debe complementarse con los principios consumeriles. Lo determinante no es la calificación contractual elegida por las partes, sino la realidad económica y funcional del vínculo. Las pruebas de autos demuestran que, frente al consumidor, ambas firmas se presentaban como una organización empresaria unitaria. Así:

- a). El sitio web www.yokohama.com.ar exhibía productos, publicidades y consignaba como domicilio el ubicado en Garín, Provincia de Buenos Aires, el mismo en el que se practicó la notificación.
- b). El actor mantuvo intercambios de correo electrónico con la dirección belen.carbone@yokohama.com.ar, suministrada por el propio distribuidor.

c). Desde la cuenta daniel.cubelas@fortalein.com.ar se remitió al consumidor al sitio de Yokohama para consultar las especificaciones de la garantía.

d). Los dictámenes técnicos sobre el estado de las cubiertas fueron emitidos como "informe de revisión técnica de Yokohama".

e). El domicilio donde fueron remitidas las cubiertas para examen es el mismo donde luego se notificó la demanda.

Este conjunto de circunstancias, que emergen de las propias constancias de la causa, permite concluir de modo lógico y sin esfuerzo interpretativo que, frente al consumidor, Fortalein operaba como canal oficial de la marca en el país. En sentido contrario, carece de verosimilitud sostener que un mero distribuidor pudiera utilizar el dominio ".yokohama.com.ar", así como correos corporativos asociados a éste, junto con la marca, logotipos y formularios oficiales, sin la autorización ni el conocimiento del fabricante japonés.

En otro orden, los actos mencionados deben apreciarse no solo desde su realidad jurídica, sino también desde la imagen que generan frente a terceros de buena fe. Quien crea una situación apta para suscitar confianza no puede luego desentenderse de sus consecuencias.

En ese contexto, el argumento de la recurrente que invoca el vencimiento del contrato de distribución en el año 2016, carece de virtualidad. Las pruebas producidas demuestran que con posterioridad a esa fecha Fortalein continuaba operando como canal de Yokohama en el país. Así lo acreditan los intercambios de correo electrónico de febrero, abril y septiembre de 2019 cursados desde y hacia dominios institucionales (@yokohama.com.ar y @fortalein.com.ar), tenidos por auténticos y validados por la pericial informática no impugnada; la recepción material de las cubiertas en el domicilio de Garín en abril de 2019 y la emisión de los dictámenes técnicos correspondientes; la posterior devolución de los neumáticos en septiembre de 2019; y la operatividad del sitio www.yokohama.com.ar, donde el propio distribuidor remitía al consumidor para consultar las especificaciones de la garantía.

En definitiva, y como con todo acierto concluyó la magistrada de primera instancia, la valoración conjunta de los elementos considerados muestra que la sentencia de grado ha resuelto correctamente la cuestión, interpretando el art. 122 inc. b) LGS de manera coherente con su finalidad legislativa, con la realidad económica del vínculo Yokohama-Fortalein y con el principio protectorio del consumidor, sin que los agravios deducidos logren desvirtuarla.

Así, la trascendencia constitucional del traslado de demanda no se discute; lo que se discute es si fue válidamente practicado, y en el caso —como quedó expuesto— lo fue, en los términos del art. 122 inc. b) LGS.

Bajo el mismo test de proporcionalidad que propone la apelante, la notificación en el domicilio de Fortalein resulta idónea porque allí se gestionó materialmente la garantía y el reclamo; resulta también necesaria porque imponer al consumidor la vía del exhorto internacional, cuando ello no era necesario, neutralizaría el principio protectorio del art. 42 CN; y también proporcionada porque el "sacrificio" para Yokohama se reduce a canalizar de modo correcto las notificaciones recibidas por su distribuidor, cosa que con el continuo avance tecnológico no presenta obstáculos insalvables.

La invocación de la sentencia de Cámara del 17/11/2025 tampoco puede ser admitida. El reconocimiento de un litisconsorcio pasivo facultativo no implica negar la representación a los efectos del emplazamiento. Son cuestiones que no se excluyen entre sí. Que cada codemandado mantenga autonomía procesal en cuanto al ejercicio de sus defensas y a los efectos de los actos

que cumpla en el proceso (litisconsorcio), no incide en la realidad funcional acreditada en autos, en virtud de la cual Fortalein operaba como representante local de Yokohama.

En cuanto a la cédula de notificación, lo cierto es que fue recibida por una empleada de Fortalein, lo cual se inscribe en la lógica misma del art. 122 inc. b) LGS, que admite la notificación en sede de la representación local.

Con respecto a la falta de inscripción invocada por la incidentista, como ya lo sostuve, si Yokohama desarrolla actividad habitual en el país a través de Fortalein —quien, como se vio, no solo comercializa sus productos, sino que además ofrecía su garantía oficial y utilizaba su marca y dominio web—, debió inscribirse en los términos del art. 118 LGS; y si no lo hizo, tal omisión no puede beneficiarla.

Por fin, en el concreto caso de autos, la apariencia se verifica con claridad: el dominio www.yokohama.com.ar consigna el domicilio de Garín; los correos corporativos llevan ese mismo dominio; el distribuidor reenvía al sitio oficial de Yokohama; los informes técnicos se emiten en papel "Yokohama"; y las cubiertas fueron recibidas en el mismo domicilio donde luego se notificó la demanda.

Por las razones expuestas, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la sentencia de grado en cuanto fue materia de agravios. Las costas de la Alzada se imponen a la incidentista vencida, conforme al principio objetivo de la derrota (arts. 60, 61 y 62 del CPCCT)..

Por ello, el Tribunal

RESUELVE:

I. NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por The Yokohama Rubber Co. Ltd. en contra de la sentencia N.º3013 dictada por el Juzgado Civil y Comercial XV Nominación, conforme lo considerado.

II. COSTAS a la incidentista vencida, conforme lo considerado.

III. RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios.

La presente sentencia es dictada por dos miembros del Tribunal por existir coincidencia de votos entre el primer y segundo votante (art. 789-792, según Digesto- del CPCC)

HÁGASE SABER

MARÍA DEL PILAR AMENÁBAR MARÍA DOLORES LEONE CERVERA

Ante mí:

FEDRA E. LAGO

Certificado digital:

CN=LAGO Fedra Edith, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 27206925375

Certificado digital:

CN=LEONE CERVERA Maria Dolores, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 27149665353

Certificado digital:

CN=AMENABAR Maria Del Pilar, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 27138486309

La autenticidad e integridad del texto puede ser comprobada en el sitio oficial del Poder Judicial de Tucumán <https://www.justucuman.gov.ar>.